

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE  
JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM**

**DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO IV**

---

D615

Ditaduras na América Latina e no mundo IV [Recurso eletrônico on-line] organização I Congresso Internacional de Justiça e Memória (I CIJUM): Universidade de Itaúna - Itaúna;

Coordenadores: Ralph Batista de Maulaz, James Weissmann e Xenofontes Curvelo Piló - Itaúna: Universidade de Itaúna, 2023.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5648-919-3

Modo de acesso: [www.conpedi.org.br](http://www.conpedi.org.br) em publicações

Tema: Enfrentando o legado das ditaduras e governos de matriz autoritária.

1. Direito. 2. Justiça. 3. Memória. I. I Congresso Internacional de Justiça e Memória (1:2024 : Itaúna, MG).

CDU: 34

---

# I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM

## DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO IV

---

### **Apresentação**

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia

no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la misma, es preciso atender una mirada trífrente. Esto es, que es necesario abordarla desde el enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar

Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y peligrosa, en un lugar común.

Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia (Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y Panamá.

**VIOLÊNCIA AUTORITÁRIA NA ERA ALBERTO FUJIMORI**  
**AUTHORITARIAN VIOLENCE IN THE ALBERTO FUJIMORI ERA**

**Natan Thalles Amado Rodrigues Rocha**  
**Samara de Oliveira Souza**

**Resumo**

A presente pesquisa aborda o Caso do Massacre no Presídio Miguel Castro Castro no contexto da ditadura peruana conduzida por Alberto Fujimori e seu acolhimento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, resultando no reconhecimento das violações perpetradas e na imposição de medidas de reparação.

**Palavras-chave:** Ditadura, Peru, Massacre, Presídiomiguelcastrocastro

**Abstract/Resumen/Résumé**

This research addresses the Case of the Massacre at the Miguel Castro Castro Prison in the context of the Peruvian dictatorship led by Alberto Fujimori and its acceptance by the Inter-American Court of Human Rights, resulting in the recognition of the violations perpetrated and the imposition of reparation measures.

**Keywords/Palabras-claves/Mots-clés:** Dictatorship, Turkey, Massacre, Miguelcastrocastroprison

# **VIOLÊNCIA AUTORITÁRIA NA ERA ALBERTO FUJIMORI**

## **Massacre Presídio Miguel Castro Castro**

### **1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O presente trabalho resume a decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao caso envolvendo o Presídio Miguel Castro Castro e o Estado do Peru. A Corte é composta por um painel de juízes e considerou denúncias de violações de direitos humanos ocorridas durante a "Operação Mudança 1" no interior do presídio, que resultaram em mortes, ferimentos e tratamento desumano a detentos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) apresentou uma demanda contra o Estado do Peru, alegando responsabilidade por violações dos direitos consagrados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Neste contexto, a Corte avaliou a competência para julgar o caso e as medidas de reparação solicitadas pela Comissão.

No tocante à metodologia da pesquisa, o presente resumo expandido utilizou, com base na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), a vertente metodológica jurídico-social. Com relação ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido o tipo histórico-jurídico. Por sua vez, o raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente dialético. Quanto ao gênero de pesquisa, adotou-se a pesquisa teórica-bibliográfica.

#### **Contexto histórico**

O processo de lidar com o legado das ditaduras e governos de matriz autoritária na América Latina é ao mesmo tempo complexo e político. Complexo, pois envolve uma série de atores e instituições dentro da sociedade e do governo, incluindo líderes políticos, organizações de direitos humanos, membros do legislativo, judiciário, sociedade civil, partidos políticos, grupos de interesse, movimentos sociais, mídia e atores internacionais. Esse processo também é político, pois envolve a competição entre diferentes grupos e indivíduos para influenciar as políticas públicas, promover a justiça e estabelecer uma democracia duradoura.

Na época em que o caso do Presídio Miguel Castro Castro se desenrolou no Peru, o país passava por um período complexo, caracterizado por desafios políticos, econômicos e sociais significativos. O contexto histórico é crucial para entender as circunstâncias que levaram a essas violações dos direitos humanos no presídio. Na década de 1990, o Peru estava se recuperando de uma longa e violenta insurgência do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso.



O governo peruano havia enfrentado conflitos armados internos que duraram cerca de duas décadas, e as instituições estavam em processo de reconstrução. Durante a presidência de Alberto Fujimori (1990-2000), o país testemunhou um período de forte autoritarismo, em que o governo adotou medidas drásticas para combater a insurgência, incluindo violações de direitos humanos.

Desse modo, a economia peruana passou por reformas significativas nas décadas de 1980 e 1990. O governo de Fujimori implementou um programa de estabilização econômica que incluía privatizações de empresas estatais e políticas de livre mercado. Isso resultou em taxas de crescimento econômico consideráveis, mas também gerou desigualdades sociais, com grande parte da população excluída dos benefícios do crescimento. Assim, a sociedade peruana enfrenta desafios significativos em termos de desigualdade, pobreza e acesso limitado a serviços básicos. A população indígena e os grupos mais marginalizados continuavam a enfrentar barreiras significativas para o acesso à educação, saúde e oportunidades econômicas. Além disso, o sistema penitenciário do país estava sobrecarregado e frequentemente sujeito a condições precárias.

O caso do Presídio Miguel Castro ocorreu nesse contexto de turbulência política, desafios econômicos e tensões sociais. O Estado peruano enfrentou críticas por seu tratamento dos detentos, refletindo preocupações mais amplas sobre direitos humanos e a qualidade das instituições democráticas no país. A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação a este caso não apenas buscou justiça para as vítimas, mas também destacou a necessidade de garantir o respeito aos direitos humanos em meio a circunstâncias desafiadoras na história recente do Peru.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos interpretou que a conduta do estado do Peru não era mera repressão a presos, mas sim, tratava-se de massacre, tortura, violação a direitos humanos, violação ao acesso à justiça, estigmatização, além da violência de gênero contra as mulheres. Para tal, tomou por base a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Convenção de Belém do Pará (direitos da mulher) e atos normativos da própria corte. Bem como, considerou outras normas de caráter *Jus Cogens*, que são normas que obrigam a todos os estados sem que necessariamente estejam escritos em um tratado de direito internacional.

No que diz respeito ao agente, estamos falando da interpretação judicial, uma vez que provém de um tribunal de direito internacional. Em relação à natureza da interpretação de que houve massacre, tortura e estigmatização, podemos considerá-la como uma abordagem sistemática e finalística das convenções internacionais sobre direitos humanos. No que se refere à violação dos direitos dos detentos, à violência de gênero e ao acesso à justiça, é

importante priorizar uma interpretação histórica desses direitos, levando em consideração os avanços que foram alcançados ao longo do tempo. Esses avanços não devem retroceder meramente devido a questões interpretativas, especialmente quando analisados por um tribunal internacional de direitos humanos. É importante notar que a interpretação histórica inclui elementos de interpretação sistêmica, lógica, finalística e de direito comparado. Quanto à extensão, estamos tratando de uma interpretação progressista, que leva em consideração os progressos alcançados por esses direitos ao longo do tempo. A interpretação constitucional dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) certamente levou em conta a interpretação histórica, social e constitucional das normas constitucionais peruanas relacionadas aos direitos humanos, à violência de gênero e ao acesso à justiça.

### **3. Aprofundando o caso**

Conforme já relatado, o emblemático Caso do Presídio Miguel Castro Castro, ocorrido durante a ditadura dirigida por Alberto Fujimori, entrou para a história da Corte Interamericana de Direitos Humanos na forma de processo judicial. Entre 6 e 9 de maio de 1992, ocorreu, no Peru, a Operação Mudança 1, que tinha como objetivo, oficialmente anunciado, a transferência de presidiários do pavilhão 1A e 4B, do Presídio Miguel Castro Castro para outros presídios. Baseada numa lei que declarou a emergência dos presídios, a Operação fazia parte de um conjunto de medidas para supostamente recuperar a situação de normalidade no país, cujo marco inicial teria sido o bem-sucedido golpe de Estado que conduziu Alberto Fujimori ao poder, a 5 de abril de 1992.

A transferência de presidiários, por sua vez, tinha como justificativa dar fim a suposta rebelião ocorrida no presídio em questão. Porém, algumas pistas levaram a Corte Interamericana a um entendimento bem diverso. Conforme sentença proferida a 25 de novembro de 2006, foi possível reconhecer que a invasão do território pelas forças públicas tinha objetivos bastante claros: massacrar um tipo específico de população carcerária.

Em primeiro lugar, porque foram alvos da Operação apenas dois pavilhões, a saber, o 1A e o 4B, embora existissem outros blocos espalhados pela penitenciária que pudessem receber a atenção dos agentes. Em segundo lugar, ao chegarem ao local, os internos não mostraram resistência e não estavam apercebidos de armas, munições e outros instrumentos que sugerissem a intenção de um confronto armado. Em terceiro lugar, os agentes do Estado invadiram de forma extremamente truculenta o local em que os detentos estavam alojados, valendo-se de explosivos, arrombamentos, demolições e fuzilamentos em várias direções. Por fim, e mais representativo ainda da real intenção de Fujimori em levar adiante esta Operação,

os pavilhões atingidos eram compostos principalmente por presos políticos ou por indivíduos que pertenciam ao partido comunista Sendero Luminoso, rival do novo dirigente do Estado peruano. Tais pessoas eram acusadas de terrorismo e traição à pátria, delitos esses que adquirem um significado bastante peculiar em contextos ditatoriais, já que fortemente associados a todo e qualquer grupo que carrega a bandeira da oposição e luta pela democracia ou por uma via alternativa à imposta pelo chefe político.

Após a Operação Mudança 1, que resultou em 40 vítimas fatais, os sobreviventes dos pavilhões atacados sofreram graves violações durante dias e noites, como assédio moral, espancamentos, choques elétricos e várias outras práticas cruéis e desumanas que justificam a atenção recebida pela opinião pública internacional e, em especial, o acolhimento do caso pela Corte IDH. Entre os internos havia, além de homens, pessoas feridas da Operação e mulheres grávidas, algumas das quais foram compelidas a dar à luz nas condições precárias e insalubres em que viviam naquele momento de terror. Outras foram lançadas em comboios e transportadas a socos e pontapés para outros presídios. Feridos foram levados para hospitais, onde situações humilhantes e moralmente degradantes, relatadas na sentença da Corte, ocorriam sem o menor escrúpulo e expunham a sede de poder e violação que o contexto autoritário inspira. Dentro de um hospital, em La Santidad, relata-se que certa mulher foi objeto de uma inspeção vaginal digital por um grupo de homens das forças de segurança. Ao se encaminharem à toilette, as mulheres também não tinham privacidade: exigia-se que a porta ficasse aberta e o grupo armado reunia-se ao redor do sanitário, fosse para vigiá-las ou para expô-las ao ridículo. Houve o caso de um rapaz transferido vivo para o necrotério e de lá resgatado pelos familiares. Muitos ainda, por falta de atendimento médico adequado, ficaram desamparados e foram a óbito. Da mesma forma, a comunicação desses detentos com seus familiares e advogados era proibida, o que reforçou o isolamento e intensificou a dor psicológica e moral que suportaram ao longo de muitos dias.

Do ponto de vista das ruas e da imprensa, tudo o que ocorrera era totalmente legal e justo. Alimentados pelo discurso oficial, a sociedade peruana e os jornais acreditavam que se tratava de um governo de bem impondo derrota a amotinados terroristas, pelo que a invasão violenta e agressiva seria medida necessária para varrê-los do país. Por essa razão, familiares e parentes dos detentos sofreram estigmatização social durante um longo período, implicando em exclusão do convívio social, a ponto de se tornarem semelhantes às párias da Índia.

Por outro lado, os sinais que circulavam ao redor do caso indicavam que a invasão realizada ao Presídio Miguel Castro Castro não fora apenas um massacre baseado num pretexto qualquer, mas guardava uma orientação ideológica bem clara: atentar contra a vida e

a integridade física de membros ou simpatizantes do partido comunista Sendero Luminoso, tendo em vista que os pavilhões atingidos compunham-se de indivíduos ligados ao partido. Em outras palavras, tratava-se de um líder político autoritário destinado a perseguir e calar movimentos subversivos, bem como assassinar seus membros.

Embora os acontecimentos relatados tenham ocorrido em 1992, o Estado peruano só começou a apurar as violações ocorridas no período em anos posteriores a 2000, quando Alberto Fujimori saiu do país e renunciou ao poder. Entre as primeiras medidas tomadas pelos órgãos estatais para esclarecer o caso incluem-se a criação de uma Comissão da Verdade, a edição do Marco Normativo do Plano Integral de Violações e a atuação da Defensoria Pública, além da fundação de Tribunais. Porém, a abertura do primeiro processo penal relacionado aos envolvidos data de 2005, aproximadamente 13 anos após a ocorrência dos fatos. Quanto às acusações que pesavam sobre os internos dos pavilhões atingidos, a Câmara Nacional de Terrorismo da Suprema Corte do Peru as declarou espúrias a 3 de fevereiro de 2004, negando que eles estivessem em motim, ou praticando ato de força ou emprego de violência. Conclusão: foram absolvidos.

A Corte IDH, por sua vez, teve o caso submetido à sua jurisdição pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos a 13 de agosto de 2004, ante a falta de implementação satisfatória do Estado peruano às recomendações feitas. A sentença foi proferida um pouco mais de dois anos depois, a 25 de novembro de 2006, com o reconhecimento das violações perpetradas.

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Após avaliar as alegações da CIDH, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou a responsabilidade do Estado do Peru nas violações de direitos humanos ocorridas no Presídio Miguel Castro Castro. O tribunal proferiu uma sentença que reconheceu a violação dos direitos à vida, à integridade pessoal, às garantias judiciais e à proteção judicial, de acordo com a Convenção Americana. Segundo a Corte, o art. 5 da Convenção Americana, que diz respeito à integridade pessoal no âmbito psíquico, físico e moral, foi violado, em conjunto com o art. 1.1, segundo o qual toda pessoa tem o direito não ser discriminado em virtude de opiniões políticas, bem como com os artigos 1 (prevenir e punir tortura) 6 e 8 (examinar caso de tortura de maneira imparcial) da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir Tortura. Da Convenção também foi violado o art. 11 (proteção da honra e da dignidade), em relação ao art. 1.1 do mesmo instrumento. Também foram violados os artigos 8 e 25 da Convenção Americana (garantias judiciais e proteção judicial), em relação ao artigo 1.1 do

mesmo instrumento, e em conjunto com os artigos 7 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e 1, 8 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir Tortura.

A Corte ordenou ao Estado peruano a adoção de medidas de reparação, conforme solicitado pela Comissão Interamericana. Além disso, determinou que o Estado deveria arcar com as custas e gastos incorridos durante a tramitação do caso. Neste caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos desempenhou um papel fundamental na busca pela justiça e na responsabilização do Estado por violações de direitos humanos cometidas no Presídio Miguel Castro Castro. A decisão destaca a importância da proteção dos direitos fundamentais dos detentos e a necessidade de reparação às vítimas e suas famílias.

No que se refere à privação de liberdade, ou, o uso da força em relação a pessoas sob custódia, a Corte IDH retoma um tema que tem sido destacado em diversas resoluções anteriores. Os eventos que envolvem violações dos direitos humanos, como a detenção inadequada e o uso excessivo da força, ocorridos em instituições penais, devem ser monitorados por aqueles que exercem controle sobre os direitos dos detidos, tanto em teoria quanto na prática. O juiz enfatiza a recorrência desse tema na jurisprudência da Corte IDH e sua significativa importância, destacando uma preocupação latente com relação a tais situações.

No seu voto fundamentado, Cançado Trindade busca enriquecer as discussões sobre os temas abordados na sentença, dada sua grande relevância. Ele aborda oito pontos distintos, que merecem atenção: a relação entre o tempo e o Direito, tanto no presente quanto ao longo da história; reflexões adicionais sobre a interligação entre o tempo e o Direito; a importância do tempo na proteção dos direitos humanos; a identificação dos eventos e dos sujeitos envolvidos no contexto legal; o surgimento da responsabilidade internacional dos Estados e o princípio da proporcionalidade; a repetição de violações estatais, um aspecto muitas vezes negligenciado pelo pensamento jurídico; a necessidade crucial de abordar questões de gênero; e a distinção entre oprimidos e opressores, ressaltando o imperativo do domínio do Direito. Iniciando a análise desses tópicos.

Cançado Trindade sublinha que a demora significativa no julgamento do caso tem um impacto particularmente severo sobre os grupos vulneráveis envolvidos. Ele argumenta que esse impacto não se limita ao aspecto cronológico, uma vez que o sofrimento desses grupos se aprofunda à medida que o tempo passa sem uma resolução. Além disso, ele ressalta que a ausência de uma cláusula específica de jurisdição não impede que a Corte Interamericana de Direitos Humanos examine o caso. Pelo contrário, a Corte IDH tem interpretado de maneira a

possibilitar o conhecimento de casos com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e em outras convenções de direitos humanos, como as relacionadas à tortura ou ao desaparecimento forçado. Dentro deste contexto, vale a pena destacar o seguinte trecho do voto:

58. El presente caso no puede ser adecuadamente examinado sin un análisis de género. Recuérdese que, como paso inicial, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) avanzó una visión holística de la temática, abordando los derechos de la mujer en todas las áreas de la vida y en todas las situaciones (inclusive, agregaría yo a la luz del cas d'espèce, en la privación de la libertad); la Convención clama por la modificación de patrones socio-culturales de conducta (artículo 5), y destaca el principio de la igualdad y no-discriminación<sup>49</sup>, – principio este que la Corte Interamericana ya determinó, en su trascendental Opinión Consultiva n. 18 (del 17.09.2003) sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, que pertenece al dominio del jus cogens (párrs. 97-111)<sup>50</sup>.

De fato, a observação de Cançado Trindade é precisa. A análise do presente caso de violação de direitos não pode prescindir de uma abordagem específica de gênero, dada a disparidade de impacto que tais violações têm sobre as mulheres. As alegações de obstáculos temporais apresentadas pelo Estado do Peru carecem de fundamento.

As interpretações da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) devem considerar os avanços proporcionados por diversos instrumentos legais, dos quais a Convenção de Belém do Pará é um marco relevante, porém não o único. A Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, já em 1979, abordava a questão da violência de gênero. Adicionalmente, a Opinião Consultiva n. 18 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, datada de 2003, enfatizava o princípio da igualdade como uma norma imperativa de direito internacional.

Assim sendo, a decisão proferida pela Corte IDH neste caso se revelou emblemática é crucial para a defesa dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, bem como para a luta contra a violência de gênero, não somente no contexto prisional, mas também em âmbitos mais amplos.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). **Relatório nº25/18 - Caso 12.428**. Disponível em: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_160\\_por.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_por.pdf). Acesso em: 25 out. 2023.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NÍCACIO, Camila Silva. (Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. 5a. ed. São Paulo: Almedina, 2020.